

Arica, ocho de julio de dos mil veintiuno.

VISTO:

Don Rodrigo Torres Díaz, Defensor Penal Público, en representación del sentenciado Branco Jeremías Porras Uribe, en causa RUC N° 2000896685-1, RIT 85-2021, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada por dicho Tribunal, de siete de mayo del año en curso, por la cual se condenó a Porras Uribe, a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad en calidad de autor ejecutor en un delito consumado de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, hecho perpetrado el 18 de enero de 2020, en la ciudad de Arica.

El recurrente, previo a indicar la causal de nulidad que invocará, sostiene que la defensa planteó la estrategia en el hecho que no resultaba posible tener por acreditada la participación de su defendido u otro en el homicidio cometido, que no existían medios de prueba suficientes para ello, en atención a que el único testigo directo de los hechos (testigo protegido) no vio el arma homicida, tampoco el momento del supuesto acometimiento y que no se pudo aseverar que fue realizado por su representado; existen dudas en cuanto a la identificación, dado que la demás prueba es solo referencial y no corroborada. El Tribunal estableció el hecho y la valoración de la prueba al efecto, pero respecto a la participación, la dio por acreditada formalmente, más allá de indicar los medios de prueba que tuvo presente para arribar a ella.

Funda su arbitrio procesal en la causal contemplada en la letra e) del artículo 373 del Código Procesal Penal, denunciando la omisión en el pronunciamiento del fallo del requisito consagrado en la letra c) del artículo 342 del mismo Código, en relación con lo previsto en el artículo 297 del referido cuerpo legal, reprochando falta de fundamentación y vulneración de los principios de la lógica de no contradicción y de corroboración, para lo cual reproduce los considerandos décimo, en el que el Tribunal dio por acreditados los hechos; el undécimo en el que fue valorada la prueba; y el duodécimo en que se realizó el análisis de la prueba en relación a la participación del encartado y los reparos a la misma por parte de la defensa; para posteriormente reproducir, en lo pertinente, los artículos 374, 342 y 297, todos del Código Procesal Penal, señalando que, a juicio del recurrente, la infracción se produce en dos momentos, los cuales serán analizados desde el prisma de los requisitos que debe contener la sentencia en lo fáctico:

- Cuando el tribunal resuelve sobre la acreditación de la acción de acometimiento sobre la víctima, de forma tal que se produzca la herida que resulta ser la causante del resultado de muerte; y
- En forma entrelazada el punto anterior, la identificación del sujeto que



habría cometido la acción homicida.

Agrega que el presente fallo adolece de falta de fundamentación para sostener algunas premisas de las cuales luego extrae conclusiones; además, no se hace cargo de contradicciones que existen en la prueba rendida y omite elementos de la prueba de cargo que generan dudas sobre la identificación del autor.

Señala que en el presente caso “lo central dentro de la prueba vertida en juicio está constituido por la declaración de un testigo protegido, puesto que los demás solo toman conocimiento por medio de terceros de lo que supuestamente habría sucedido de otras terceras personas. Tanto en cuando y como se produjo la lesión causadora de muerte, con qué instrumento se realiza ya que no se presenta a juicio como prueba material, y la identificación del causante, de esta forma:

En cuanto a la existencia del arma homicida, la testigo protegida, tal y como se recogen en el considerando undécimo, si bien ve una discusión a 15 metros de distancia, no es menos cierto que, de acuerdo a su propia declaración consultada sobre armas o instrumentos que pudieran la herida mortal: Nunca les vio nada en las manos a los sujetos que discutían.

Al sitio concurren funcionarios de Carabineros y luego de Policía de Investigaciones y no encontraron ningún elemento de importancia criminalística, no se incautó ningún objeto que pudiera haber sido utilizado para cometer el delito.

De la demás prueba rendida por el Ministerio Público (sic), nada existe respecto a cuál sería el arma empleada, nadie la vio, nadie supo de ella. Solo existen referencias entre los testigos presentados por el ministerio público que más que precisar hechos, los confunden, simple información de rumores tal y como sostiene el funcionario policial RAFAEL ALBERTO HERRERA BUSTAMANTE.

El sitio fue periciado por el funcionario ADOLFO IGNACIO ESPINA MUÑOZ, quien depone en juicio dando cuenta de que no se encontró ningún objeto de interés criminalístico, que el único testigo presencial es la testigo protegida, y que se tomó conocimiento del hecho por denuncia telefónica que habría realizado una tal ROXANA PASTEN, a quien reconoce no se le tomó declaración posteriormente, persona que finalmente tampoco declaró en juicio.

En el juicio se presentaron supuestos testigos de los hechos, como fue la madre de la víctima, doña MARÍA JEANNETTE ALVEAR SANHUEZA, quien refiere que tomo (sic) conocimiento de los hechos porque una tal PAOLA llegó (sic) a su domicilio informándole que le abrían pegado a su hijo, que el Branco Porras lo habría acuchillado, luego indico (sic) como se evidencia en contra examen de que lo que se le habría informado solo que era que le babia (sic) pegado por esta tal Paola, ella al lugar donde se encontraba su hijo herido, siendo esta la única información que puede entregar sobre el punto. Su fuente de



información fue la tal PAOLA, persona que tampoco declaro (sic) en juicio, como hubiera sido necesario para saber cómo obtuvo la información que supuestamente entrego (sic), que fue lo que realmente ella vio o le contaron; tampoco se presentó funcionario policial que le hubiera tomado declaración a esta supuesta testigo PAOLA.

Se presentó la hermana de la víctima doña SILVIA DEL CARMEN VARELA ALVEAR, quien se encontraba en Antofagasta y habría sabido por su primo Pablo Muñoz, que su hermano habría tenido una pelea con Branco Porras y lo abrían (sic) acuchillado. En juicio no se presenta a dar cuenta de estos dichos ni este don Pablo Muñoz como tampoco hermana de la testigo.

Finalmente la única testigo que algunas luces puede dar respecto de los hechos termina siendo la llamada TESTIGO PROTEGIDA, que el tribunal valora en términos creíble y coherente su relato, pero fue testigo que no vio acto de acometimiento, identifica al sujeto solo por apellido y luego da una serie de nombres a los cuales podría corresponder al sujeto que ve discutir con la víctima, es el propio Ministerio Publico quien de ahí en adelante sus preguntas refiriendo al sujeto agresor como el “Porras”

Indica en lo particular la testigo referente a lo que vio:

- “ve discutir unos jóvenes, cuando los vi al principio no sabía quién eran, a uno lo ubique y al otro chiquillo no, ubique al otro y este era “Porras” el nombre no lo sé bien, al otro joven no lo conocí” (minutos 4:23 a 5:02 de su declaración).
- En cuanto a la agresión indica: no vi yo, con que lo agredió, nada, porque de la parte de donde estaba había obstáculo, porque había vehículos (minutos 6:25 a 6:36).
- Respecto a objetos, refiere a ver las manos de los que se tiran las manos, vio las manos de esas personas, que se tiraban y no tenían objeto en ellas ninguno de los dos (minuto 7:24 a 7:52), reiterándolo una segunda vez (minuto 8:45 a 8:58).
- Indica que estaban peleando, el niño iba retrocediendo, el que murió y que el otro iba como atacando, pero sin nada en las manos, y no vio cuando uno cayo, que luego ve que el niño cayo, que no lo vio porque había un vehículo y luego se paró y lo vio herido, “Porras” lo intimidaba para pegarle, cuando el sujeto cae no vio que estaba haciendo “Porras” por no podía ver por unos vehículos que había (minutos 9:10 al 10:45)
- Reconoce que no vio cuando una persona había sido agredida con un cuchillo o un sable o algo, no vio nada (minutos 57:35 a 48:00)

De estos hechos finalmente el tribunal desprende que habría sido en el momento que la testigo protegida se produce el acometimiento sobre la víctima, aunque ella relata no ver ese momento; toda la prueba periférica de forma alguna puede contribuir a construir esta aseveración, toda es prueba referencial, y sin fuente de origen corroborarle; nadie vio al sujeto que agrede con un arma, nadie



puede dar cuenta que resulta posible estuviera con la herida antes de producirse la pelea, o posterior cunado (sic) la víctima se traslada hasta el lugar donde finalmente cae, no hay grabaciones de cámaras, no declara la supuesta testigo que hace la denuncia telefónica, no declara la llamada testigo Paola, que sería la que informa de los hechos a la madre de la víctima. Como entonces logra el tribunal llegar a esta premisa sin contar con mayores antecedentes al punto.

Y luego referente a la identificación del sujeto activo de los hechos, toda la referencia que existe es la declaración del testigo protegido, quien reconoce no saber cómo sería el nombre del sujeto, solo lo refiere como el “Porras”, elemento insuficiente para atribuirle participación, cuando más aun en el juicio no lo describe, no recuerda las ropas, como tampoco lo reconoce en la audiencia. La demás prueba tampoco nada aporta, ya que nadie más puede hablar de haber visto al sujeto activo, todo el resto de los testigos no policial solo indicaron lo que por terceras personas les habrían dicho, y ninguno de ellos se presentó a juicio, y los policiales solo reiteran lo que ya declararon los ya citados testigos de oídas en estrado, no realizan ninguna diligencia real que pueda contribuir en algo en este punto.

No existe forma de hacer una vinculación en forma lógica y razonable de cómo llega a tener por acreditada esta premisa, de que el acusado es el llamado “Porras”, y atribuir a ese llamado porras sea el sujeto que peleó ese día con la víctima, y conectar a que sería en esta pelea que se produce la herida mortal.

Nada une estos puntos. Lo anterior, se ve reforzado en que ni siquiera el Ministerio Publico intentó acreditar que cuando alguien se refiere a un sujeto como “Porras” se refiere directamente al acusado, resulta insuficiente identificación; tal y como queda claro por ejemplo al conocer que en el propio Ministerio Publico (sic) presento (sic) en su prueba a un “Porras” como testigo, Jairo Porras Uribe, y nunca presentó prueba para entender que “Porras” lo hace necesariamente a Branco Porras o no a Jairo u otra persona de apellido “Porras”.

El recurrente sostiene que esta falta de elementos y circunstancias hace que no se pueda tener por superado el límite establecido en “más allá de toda duda razonable”, porque no se trata solo de consideraciones accidentales como pretendió sostener el Tribunal al indicar en su considerando undécimo: “No está de más recordar que una duda razonable, a la aboga el relato del defensor, para que sea tal, ha de recaer en aspectos sustantivos en que se funde el establecimiento del hecho punible o la participación de algún acusado, y no en cuestiones meramente accidentales”. Sino por el contrario, son serias y relevantes consideraciones que no permiten destruir la barrera del principio de inocencia que ampara a su representado.

Por todo ello, resulta evidente que una sentencia que no cuente con la suficiente fundamentación y contrariando los principios de la lógica, como en este caso en particular, de confusa e incongruente fundamentación, no puede ser objeto del control necesario, no sólo por parte de la defensa, sino de toda la



sociedad, que se sostiene en un Estado de derecho, que requiere certeza acerca de los hechos por los cuales se condena a una persona y la forma en que se arribó a dichas conclusiones.

Pide que se invalide la sentencia recurrida y el juicio oral, retrotrayendo la causa al estado de celebrar una nueva audiencia de juicio oral por un Tribunal no inhabilitado que corresponda.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, don Rodrigo Torres Díaz, Defensor Penal Público, en representación del sentenciado Branco Jeremías Porras Uribe, interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, que lo condenó a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, y accesorias legales correspondientes, como autor del delito de homicidio simple en la persona de Bruno Esteban Varela Alvear, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, perpetrado en Arica el 18 de enero de 2020.

Funda su arbitrio procesal en la causal de nulidad contemplada en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, denunciando en el pronunciamiento del fallo la omisión del requisito consagrado en la letra c) del artículo 342, en relación con el artículo 297, ambos del citado Código, por los argumentos reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, la que se da por reproducida por razones de economía procesal.

Segundo: Que, en síntesis, el recurrente reprocha falta de fundamentación y vulneración de los principios de la lógica de no contradicción y de corroboración para dar por acreditado el hecho como la participación de su representado en él, por ser confusa la primera, que no puede ser objeto del control necesario, no sólo por parte de la defensa sino de toda la sociedad, en un Estado de derecho que requiere certeza acerca de los hechos por los cuales se condena a una persona y la forma en que se arribó a dichas conclusiones.

Tercero: Que, el Tribunal, en el considerando décimo dio por acreditado el siguiente hecho: “En Arica, el 18 de enero de 2020, alrededor de las 01:00 horas, en las cercanías de la intersección de calle Oscar Belmar con Pasaje 3, el acusado Branco Porras Uribe, en medio de una discusión, agredió a la víctima Bruno Esteban Varela Alvear, con un elemento corto punzante, en el tórax, ocasionándole una lesión consistente en herida penetrante, cortante, en el quinto espacio intercostal derecho, por el costado del esternón.

Luego de la agresión, la víctima camina hacia pasaje 3, donde se desvanece en la vía pública, siendo auxiliado y trasladado al Hospital Local, donde falleció a las 02:00 horas del día 18 de enero de 2020, toda vez que la lesión llegó a la base del ventrículo derecho, provocándole un paro cardio respiratorio por taponamiento cardíaco”.

Cuarto: Que, de la simple lectura del recurso, se colige que se reprocha al Tribunal el haber acreditado los hechos existiendo solamente un testigo



presencial, que no vio el arma homicida, tampoco el momento del supuesto acometimiento y que no pudo aseverar que fue realizado por el encartado, planteándose dudas en cuanto a su identificación, siendo la demás prueba referencial y no corroborada; sin embargo, no se desarrolla, como legalmente procede, la forma en que se produciría la vulneración al principio de no contradicción; y en cuanto a la falta de corroboración al que se refirió expresamente el Tribunal al analizar la prueba-, también denunciado como vicio, es necesario señalar que el inciso tercero del artículo 297 del Código Procesal Penal, dice: “La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados.”, norma que permite acreditar un hecho con un solo medio de prueba.

Quinto: Que, los jueces orales, en el considerando undécimo efectuaron la ponderación de la prueba, razonando de la siguiente manera: “De la valoración de los medios de prueba en relación al hecho punible.

Según se esbozó en el motivo noveno, no hay discusión respecto de la muerte de la víctima y causa de ella, habida cuenta de la tesis de defensa adoptada por el letrado del acusado, sin perjuicio de ello, dicho contenido ha resultado acreditado con los asertos del perito médico legista Patricio Moyano Pizarro, quien ilustró acerca de la autopsia efectuada al cuerpo de la víctima, Bruno Varela Alvear, el 20 de enero de 2020, dando cuenta que el fallecimiento aconteció el 18 de enero de dicho año, a las 2:20 horas, ello luego de haber ingresado al Servicio de Urgencia del Hospital local, alrededor de las 1:30 horas, donde se le practicó maniobras de reanimación al haber ingresado en paro cardio respiratorio. Refirió que, al examen del cuerpo, pudo detectar que “...presentaba una lesión penetrante, cortante, en el quinto espacio intercostal derecho, por el costado del esternón de 2 centímetros de longitud por 0,5 de anchura, a 18 centímetros de la clavícula del lado derecho, y a 128 centímetros del tobillo derecho, a unos 3 centímetros de la línea media”, concluyendo que “...el sujeto habría fallecido por un taponamiento cardíaco, a raíz de una herida penetrante cardíaca, provocada por arma blanca, y que no pudo ser recuperado”. Causa de muerte que, a raíz del elemento empleado en la lesión, tiene el carácter de homicida.

El referido relato resulta veraz, a juicio de estos sentenciadores, en la medida que el perito, sometido al examen de los intervinientes, dio cuenta detallada y contextualizada de la metodología empleada para arribar en forma lógica y coherente a su conclusión. En efecto, refirió la ubicación y las medidas de la lesión, la trayectoria de la misma, objeto que la ocasionó, y la complejidad del tratamiento, todo lo que llevó a la muerte de Varela Alvear, ilustrándose, además, con su historial de atención médica, explicando las maniobras que se realizaron al momento de prestarle asistencia médica.

A su vez el relato efectuado por el profesional médico legista, resulta



concordante y corroborado con lo consignado en la prueba documental incorporada por el persecutor, consistente en el Dato de Atención de Urgencia y el certificado de defunción de la víctima. El primero de ellos, al consignar que, en el Hospital Local, se asistió, el día 18 de enero de 2020, a las 01:42 horas a Bruno Esteban Varela Alvear, por una herida penetrante torácica, con pronóstico médico legal provisorio de fallecido, paro cardíaco (penetrante de tórax)), siendo derivado al Servicio Médico Legal; y, el segundo, documento que acredita la defunción de Varela Alvear, el día 18 de enero de 2020, a las 02:20 horas, cuya causa es un paro cardiorrespiratorio por taponamiento cardíaco/hemorragia pericárdica aguda/herida penetrante cardíaca.

Por su parte, las circunstancias del día, hora y lugar en el cual aconteció la agresión sufrida por la víctima Bruno Varela Alvear, igualmente no aparecen directamente discutidas por la defensa, ello a raíz de su estrategia procesal, sin perjuicio de lo cual, aquellas circunstancias resultaron acreditadas con los dichos claros, coherentes y categóricos de la Testigo Protegido T -1, quien, en dicho punto y, en síntesis, refirió que aconteció como a las 12:30 o 1 de la mañana del día 18 de enero de 2020, en Oscar Belmar con las intersecciones de pasaje 3 y 5, y que ella estaba distante unos 15 metros, desde donde pudo divisar a la víctima discutiendo con Branco Porras Uribe, que lo ve caer, y luego, cuando se incorpora ve sangre en su pecho, que camina unos metros y en pasaje 3 se encuentra a Jairo Porras, que le pega una cachetada o lo empuja, luego retrocede y se desploma en la calle.

La síntesis del antedicho testimonio, resulta, a su vez creíble, en la medida que el contenido de su declaración aparece conexo y estructurado en términos explicativos entre un suceso y otro (posicionamiento, visualización de la dinámica de agresión y trayecto adoptado por víctima y acusado), además, dicho testimonio ha podido ser objeto de corroboración, a la luz de la restante prueba testimonial, directa, incorporada por el persecutor.

En efecto, primero, el relato de la madre de la víctima, María Jeannette Alvear Sanhueza, quien, en síntesis y lo pertinente al punto, refirió que le avisaron sobre su hijo, el 18 de enero de 2020, a la 1 de la mañana, y que concurrió hasta donde se encontraba en pasaje 3, casi en la esquina, que estaba tirado y que con él estaba Jairo, como que lo reanimaba, que su hijo “tenía sus ojitos hacia arriba, su mano se la apretó un poquito”; y, en segundo lugar, se suma lo afirmado por Jairo Israel Porras Uribe, hermano del acusado, quien indica que vio a la víctima “...con la mano al pecho, responde que lo vio hasta el pasaje 3, había varios chiquillos, se agarró el pecho y le pegó dos cachetadas para que reaccionara...”, agregado, luego, que “...venía mal, le dijo ayúdame, y caminó hasta el medio de la huella y se desplomó, y mandó a buscar a la mamá de él”.

De esta forma, todas las declaraciones antes referidas, aparecen verosímiles, consistentes y coherentes entre sí, en tanto dan cuenta de hechos que quienes las emiten pudieron apreciar directamente con sus sentidos, por



haberlas vivido (madre de la víctima y hermano del acusado), y cuya secuencia de desarrollo aparece lógica y posible desde la perspectiva de la razonabilidad, coincidiendo en los aspectos centrales de los sucesos, de los cuales dieron cuenta de forma detallada y circunstanciada (el encuentro con la víctima Varela Alvear, verificando las condiciones físicas en que se encontraban el día 18 de enero de 2020, a las 1:00 de la madrugada).

Sin perjuicio de lo señalado, la información proporcionada por la testigo protegida T-1, referente al día, lugar y hora de ocurrencia, igualmente resulta corroborada con la evidencia material consistente en la filmación del video, fotografías y el audio de la llamada a CENCO, incorporadas por la persecutora penal, en la que se dio cuenta que los hechos acaecieron el día 18 de enero de 2021, alrededor de las 1:00 horas, en calle Oscar Belmar, cercano a la intersección de los pasajes 3 y 5. Evidencia, además, que fue ilustrada por los dichos de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, Rafael Herrera Bustamante, quien se refirió al video propiamente tal, de día y hora en que se captó la imagen, especialmente, refirió respecto de su desfase horario, precisando el motivo de ello, desterrándose así el reparo que formuló la defensa a su respecto, y Adolfo Espina Muñoz, quien, dio cuenta de las fotografías relativas al lugar de ocurrencia de los hechos y, especialmente, de la transcripción de la llamada recepcionada por la Central de Comunicaciones de Carabineros, efectuada por una denunciante, Roxana Pasten, dando cuenta de la dinámica de la pelea y, en lo pertinente a este punto, lugar de ocurrencia y lugar de posicionamiento de la víctima. Último punto de la llamada que, además, resulta conteste con lo afirmado por el testigo Roberth Edgardo Barriga Carmona, funcionario de Carabineros de Chile, que el 18 de enero de 2020, concurre al sitio del suceso, Oscar Belmar con pasaje 3, ello por haberse acogido una denuncia alrededor de las 1:15 horas, dando cuenta que una persona fue agredida con arma blanca, en la vía pública, y que el lesionado ya había sido trasladado a la Posta.

De este modo, a base del análisis de las probanzas incorporadas por el persecutor penal, se pudo arribar a que la muerte de la víctima acaeció el 18 de enero de 2020, a las 2:20 horas, y que la misma tuvo su origen en una agresión con un arma cortante, sufrida alrededor de las 1:00 horas de dicho día, en la intersección de calle Oscar Belmar con pasaje 3.”.

Y en el considerando duodécimo efectuaron el análisis de la prueba para dar por acreditada la participación de Porras Uribe en el hecho dado por probado en el raciocinio décimo, señalando: “De la valoración de los medios de prueba en relación a la participación del acusado y de los reparos a la prueba efectuado por la defensa del acusado.

Conforme se adelantó en el motivo noveno, la discusión, en el presente juicio ha quedado en la acreditación, más allá de toda duda razonable, respecto de la participación, en calidad de autor, del acusado Branco Jeremías Porras Uribe,



respecto del homicidio de la víctima Bruno Varela Alvear, habida cuenta de los reparos manifestados por la defensa, en orden a que la prueba rendida por el persecutor no permite superar el estándar de condena antes señalado.

No está de más recordar que una duda razonable, a la aboga el relato del defensor, para que sea tal, ha de recaer en aspectos sustantivos en que se funde el establecimiento del hecho punible o la participación de algún acusado, y no en cuestiones meramente accidentales.

Ahora bien, en orden a atribuir la participación del acusado en el acometimiento que originó la muerte de la víctima, se incorporó la declaración de la testigo protegida T-1, quien, en lo sustancial del punto y, en síntesis, vio que estaban dos jóvenes discutiendo, que no escuchó lo que se decían, que ubica a uno como el “Porras”, y que se fueron como a pegarse combos, que “... el niño cae y después se levante y ve que el niño sale sangrando...” y que después Porras sale para la esquina. Indica que ella estaba como a 15 metros, y consulta acerca si la víctima tenía algo en su mano, refirió nunca le vio nada, igual que el otro joven; que vio que Porras lo iba como atacando, luego, el niño cayó, no vio si de espaldas o de frente ya que había unos vehículos; que estaban ellos solos en esa acción, y relata que Porras arrancó y el otro joven se paró, y ahí se dio cuenta que estaba sangrando, que tenía sangre como en el pecho, que no era mucha. Indicó que cuando el niño se levantó lo quiso seguir, pero no fue capaz, y ahí se dio vuelta y bajó a Oscar Belmar con pasaje 3, que estaba el hermano del Porras, y vio que le pega como una cachetada, el niño retrocede y ahí se desploma, ahí el hermano de Porras lo ayudó, lo auxilió.

Luego refiere que fueron a avisar a la mamá del fallecido, quien llegó, y ahí se acercó, se veía muy mal.

Respecto del relato antes referido, para estos jueces, ha resultado creíble, pues la información por ella proporcionada, en un primer momento, fue objeto de contraste por parte de los intervinientes, resultando un relato coherente en sí mismo; que la sustancialidad de la misma se ha mantenido inalterable, a la luz de lo expuesto por la funcionaria de investigaciones Camila Francisca Yáñez Cid, quien recibió su relato, en sede policial. A ello, además, se suma la cantidad de detalles que dio cuenta la testigo en su declaración, en las distintas dinámicas del hecho, que permiten someterlo a contraste y corroboración con las restantes probanzas incorporadas por la persecutora penal, dotándolo, en consecuencia, de mayor credibilidad, a saber:

1° En cuanto a la existencia de la discusión y/o pelea y sus partícipes (víctima y acusado), que relata la testigo protegida T-1, hasta la caída de la víctima, aquello resultó corroborado con la evidencia material, consistente en el llamado telefónico efectuado a la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile, 133, por parte de Roxana Pasten, denunciando la pelea en la intersección de calle Oscar Belmar con pasaje 3, refiriendo que la persona que agredió se retiró del lugar, arrancó por pasaje 5, y que el que se encuentra tirado en la calle,



cree que vive en el pasaje 8.

La defensa manifestó reparos en relación a la evidencia material del llamado telefónico, sustentada, primero, en que no se puede determinar si se trata o no de la misma comunicación telefónica, habida consideración que la denunciante no se presentó a declarar, y, segundo, que la denuncia efectuada por ella presenta “contradicciones”, pues refiere que vio la pelea y al sujeto cae por largo tiempo, y el único momento en que la víctima permanece por largo tiempo “es el lugar 2, donde cae muerto”.

En relación al primer reparo, del día y hora de la comunicación, es preciso indicar que aquella resulta creíble que se trata de aquella efectuada el día 18 de enero de 2020, alrededor de las 1:00 de la mañana, en la medida que, por dicha información, llegó personal de Carabineros al sitio del suceso, pues el testigo Roberth Edgardo Barriga Carmona, así lo refirió que estaba de servicio nocturno el 18 de enero de 2020 y por “una denuncia que se acogió en esa fecha, alrededor de las 1:15 de la mañana, fueron requeridos en pasaje 3, por un asunto que había una persona lesionada con arma blanca en el lugar, vía pública”, de tal modo, resulta razonable y sin lugar a dudas que la antedicha comunicación haya generado la presencia de personal policial en el lugar, más aún cuando el funcionario que atiende la llamada refiere “va a enviar a carabineros”.

Por su parte, en relación al segundo reparo, acerca de la supuesta inconsistencia, del propio examen de la denuncia al 133 de la Central de Comunicaciones de Carabineros, aparece que aquello no es así, pues se consigna “... la emergencia que tengo es que aquí, afuera de la casa, estaban unos jóvenes peleando, y uno le enterró una cuchilla, un puñal a otro y está tirado en la calle, en medio de la calle, entre, frente al pasaje 3 con Oscar Belmar, hace rato ya”, resultado claro que se trata de circunstancias temporo-espaciales diversas, pues si bien hace referencia a la existencia de la pelea y el enterró de un puñal, el hecho de que se encontrase tirado en el suelo dice relación con la secuencia final del acometimiento, más aún cuando precisa que el agresor se arrancó del lugar y el otro se encuentra tirado.

2° En cuanto a la dinámica que relata la testigo protegida T1-1, después de la caída, el trayecto adoptado por la víctima y su posterior desplome en la vía pública, aquello resultó corroborado con lo expuesto por el testigo Jairo Porras Uribe, quien, vio al Bruno que tenía la mano en el pecho, que le pegó dos cachetadas para que reaccionará, que se fue caminando al medio de la huella y se desplomó. Aserto que, por lo demás, resulta concordante con lo visualizado en la evidencia material consistente en la grabación filmica del día de los hechos, apreciándose a la víctima camina por calle Oscar Belmar, que al llegar a la esquina se le acercó un sujeto, que le dio unas cachetadas en la cara, quien resultó ser Jairo Porras Uribe, conforme, además, expuso el funcionario policial Rafael Alberto Herrera Bustamante, que realizó diligencias investigativas y, en lo concreto, incautó la grabación antes referida y, en el examen de la misma,



reconoció a la víctima, por el tatuaje en su pecho, y a Jairo Porras Uribe, por sus vestimentas.

3° En relación a la herida en el tórax, vista luego de la caída, respecto de la cual, la testigo protegida T-1, refirió que sangraba, pero en poca cantidad, detalle preciso que resulta conteste con lo afirmado por el perito médico legista Moyano Pizarro, al exponer que la lesión no necesariamente provoca sangramiento externo, lo que, a su vez, aparece reflejado en las imágenes del video incorporado como medio de prueba.

Ahora, conforme lo destaca la defensa, si bien no se presentó un testigo que dé cuenta del acto de acometimiento, vale decir, la agresión directa que realizó Branco Porras Uribe en contra de la víctima Bruno Varela Alvear, no es menos cierto que aquella circunstancia resultó probada a base del análisis lógico, sin lugar a dudas razonables, de los hechos antes referidos. En efecto, se probó:

Primero: la circunstancia que víctima (Bruno Varela Alvear) y victimario (Branco Porras Uribe) tuvieron una discusión en las inmediaciones de pasaje 3 y 5 con calle Oscar Belmar el 18 de enero de 2020, y estaban como lanzándose las manos, acto que finalizó con la caída de la víctima,

Segundo: que al reincorporarse la víctima (Bruno Varela Alvear), presentó sangre en la zona del pecho, y el victimario (Branco Porras Uribe) huyó del lugar;

Tercero: el hecho que la víctima (Bruno Varela Alvear) y el victimario (Branco Porras Uribe) eran los únicos partícipes de la acción antes referida; y

Cuarto: la víctima (Bruno Varela Alvear) se desvanece en la vía pública a consecuencia de la herida.

Las premisas antes indicadas conducen de forma unívoca a establecer que el causante de la herida que ocasionó la muerte a Bruno Varela Alvear fue Branco Porras Uribe.

Si lo anterior no resultase suficiente, se debe agregar que la prueba rendida en juicio no dio cuenta de una hipótesis diversa (la defensa sólo se basó su teoría en la insuficiencia probatoria), sino que, por el contrario, las restantes probanzas que incorporó el persecutor permitieron asentar el hecho relativo a la participación del acusado, desterrando todo tipo de dudas, a saber:

1° Los dichos de la testigo María Jeannette Alvear Sanhueza, quien, en síntesis, dio cuenta que le avisaron que Bruno estaba tirado en la vía pública, que fue una muchacha que esta por el sector, que se llama Paola, que le dijo que le pegaron, luego refirió que le dijo (Paola) que el Branco Porras le enterró un cuchillo, y que al llegar vio a su hijo, que estaba con el hermano del Branco, Jairo, quien le afirmó que Branco realizó la acción.

El antedicho testimonio, resulta veraz, y da fuerza a las conclusiones antes arribadas en orden a acreditar la participación del acusado Branco Porras Uribe, toda vez que, por un lado, los reparos que manifestó su defensa dicen relación con asuntos meramente circunstanciales y no de carácter sustancial; y, por el otro, lo relatado se encuentra ilustrado con una gran cantidad de detalles, que permiten



su contraste y corroboración con las restantes probanzas que incorporó el persecutor.

En cuanto a los reparos de la defensa, se centró en dos aspectos:

El primero, en que la testigo refirió que su hijo fue golpeado por el acusado y no acuchillado.

Reparo que resulta superado por el propio análisis del testimonio de María Alvear Sanhueza, quien, bajo el contraexamen del propio defensor reconoció haber declarado que le enterró algo o que le había pegado con algo, pero en su declaración policial, frente al ejercicio del artículo 302 del Código Procesal Penal, se consigna que “le había pegado un ex amigo, de mi hijo, de nombre Branco Porras”, luego, dando cuenta de sus dichos, afirmó que para ella pegar o acuchillar viene siendo lo mismo. La conclusión a la que arriba la testigo, respecto del uso sinónimo de las palabras “golpeo” y “acuchilló”, además, no es extraño en su relato, pues resulta concordante con la exposición que realiza, siempre bajo el propio contraexamen del defensor, al responder que Jairo le dijo que el Branco le había pegado.

De lo señalado, aparece que la observación levantada por la defensa, a título de “contradicción” del testimonio resulta ser superflua, más aún cuando son los únicos partícipes de la dinámica, son Varela Alvear y Branco Porras Uribe, y que el primero, antes de caer no presentaba lesión alguna y, luego, al incorporarse, aparece con la lesión en el pecho que le causó la muerte.

El segundo, relativo a la persona que entrega la información, Paola, que no se presentó a declarar, no habiendo forma de tener ese elemento conductor, que de grado de valor a la información que proporciona la madre. Dicha conclusión, de la defensa, a juicio de estos sentenciadores, no resulta efectiva, al existir y haberse incorporado prueba que posiciona a Paola, desarrollando las acciones que describió María Alvear Sanhueza.

Sobre el particular, es preciso señalar que efectivamente Paola, que resultó ser Paola Arnés, se encontraba en el lugar, el día y hora que acontecieron los hechos, habiendo prueba que vincula su actuación.

En efecto, el testimonio judicial de Jairo Porras Uribe la posiciona en el lugar, al referir que luego que se desplomó Bruno mandó a Paola a avisar a la mamá a su casa; lo que, a su vez, resulta concordante con lo afirmado por la testigo protegida T-1, quien refirió que efectivamente Jairo mandó a avisar a la mamá de la víctima y que ella llegó en forma posterior al lugar donde se desplomó su hijo. De tal manera que existe un conjunto de testimonios que posicionan a Paola Arnés en el lugar, realizando la acción de llevar la comunicación de lo acontecido a Bruno Varela a su madre.

Por otro lado, en relación al contenido de la comunicación que verbalizó Paola a María Alvear Sanhueza, y que fueron relatados por ésta última, a juicio de estos jueces, dicha aseveración resulta veraz, a la luz de los dichos expuestos por el funcionario policial Rafael Alberto Herrera Bustamante, quien tomó



conocimiento de las declaraciones policiales efectuadas por Paola Arnés y Jairo Porras Uribe, dando cuenta éste último del envío de la primera a la casa de la víctima, a fin de informar su situación, dando cuenta que el autor fue Branco Porras Uribe. Si bien se reconoce que lo afirmado por Herrera Bustamante tiene la calidad de un relato de oídas, aquello no impide dicho que testimonio dote de un mayor grado de credibilidad a lo expuesto por María Alvear Sanhueza, más aún cuando lo relatado resulta concordante con la reproducción de la grabación de la denuncia que se formuló al 133 de carabineros.

2° La reproducción de la evidencia material, consistente en el llamado telefónico efectuado a la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile, 133, por parte de Roxana Pasten, dio cuenta que: “la emergencia que tengo es que aquí, afuera de la casa, estaban unos jóvenes peleando, y uno le enterró una cuchilla, un puñal a otro y está tirado en la calle, en medio de la calle, entre, frente al pasaje 3 con Oscar Belmar, hace rato ya, uno está tirado en el suelo y el otro arrancó, al que lo apuñalaron no sé qué le hizo, pero esta sangrando, está tirado en la calle”; más adelante, indica “...se arrancó por el pasaje 5 hacia el cerro, pero el que está tirado en la calle tiene entendido que vive en el pasaje 8, son de acá en todo caso...”.

Los reparos efectuados por la defensa, sobre la presente prueba, fueron abordados en forma previa, reproduciendo, por razones de economía procesal, la fundamentación para su rechazo.

Como se aprecia, se trata de un conjunto de antecedentes, que al resultar coherentes y consistentes entre sí, permiten al Tribunal llegar a la convicción suficiente para tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, que a Branco Jeremías Porras Uribe le ha cabido participación en calidad de autor en el delito de homicidio, de conformidad a lo prevenido en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, por haber sido él quien intervino en la ejecución del ilícito de una manera directa.

Finalmente, los reparos acerca de la las restantes filmaciones que no fueron incorporadas por el Ministerio Público, es dable indicar que aquello escapa del análisis a la prueba a que se encuentra obligado el Tribunal, más aún cuando la tesis defensiva decía relación con la deficiencia probatoria que resultó incorporada. Por otro lado, en relación a que no se pudo dar con el arma homicida, aquello no es óbice a la conclusión arribada, en orden a que se trató de una lesión cometida con un arma corto penetrante, conforme fue latamente expuesto y valorado con antelación. Ello lleva a descartar los reparados formulados por el letrado defensor. Por otro lado, en cuanto a la prueba testimonial de Silvia Varela Alvear, no se tomó en consideración puesto que su relato se basa exclusivamente en los dichos que conoció por su primo y su hermana, quienes, además, no resultaron replicados por ninguno de los otros testigos y evidencia incorporada, lo que resta fiabilidad a su información.”.

Sexto: Que, de los razonamientos reproducidos precedentemente, se



constata que el Tribunal, tanto en el establecimiento de los hechos como en la participación del acusado en ellos, ponderó los medios de prueba producidos en el juicio oral dando cumplimiento a las exigencias que consagra el artículo 297 del Código Procesal Penal, ejercicio que difiere totalmente del análisis que de la misma efectúa el recurrente para fundamentar su arbitrio procesal, lo que no corresponde a uno de nulidad, obligando a desestimarlos.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas, y lo dispuesto en los artículos 372 y 384 del Código Procesal Penal, se rechaza el recurso de nulidad deducido por don Rodrigo Torres Díaz, Defensor Penal Público, en representación del condenado Branco Jeremías Porras Uribe, en contra de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, de siete de mayo del año en curso, y consecuentemente, se declara que dicho fallo como el juicio oral que le dio origen, no son nulos.

Regístrese, notifíquese y comuníquese por la vía correspondiente.

Redacción del Ministro, señor Marcelo Urzúa Pacheco.

Rol N° 160-2021 Penal



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por los Ministros (as) Marcelo Eduardo Urzua P., Maria Veronica Quiroz F., Claudia Florencia Eugenia Arenas G. Arica, ocho de julio de dos mil veintiuno.

En Arica, a ocho de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

